Nº 468

Boletín Encuentro

Julio 9 de 2016

Junta Nacional plantea accionar por la unidad de Fecode

La Junta Nacional del 7 de julio fue atípica, pues se dividió en dos sesiones, mientras el Comité Ejecutivo se reunía con el presidente de la República.

La Junta Nacional de Fecode, que se llevó a cabo en Bogotá el pasado jueves 7 de julio, dejó importantes conclusiones frente a los temas de coyuntura que afectan al magisterio nacional.

Masiva participación de los sindicatos filiales a la Junta Nacional de Fecode, que se celebró el jueves 7 de julio, donde se aprobaron temas de coyuntura que permiten fortalecer al magisterio nacional:

El próximo 27 de julio en el Salón Rojo del Hotel Tequendama se llevará a cabo el Encuentro Nacional de los Sectores Sociales financiados por el SGP, con temas relacionados con educación, salud, agua potable y saneamiento básico.

Se solicitará a la fiduprevisora el nuevo prepliego de condiciones, para que los sindicatos filiales puedan recoger todas las inquietudes y, de esta manera, sean remitidas al Fomag antes del 27 de julio.

Se hará la selección de los técnicos y miembros de Comité Ejecutivos de Fecode, que estarán presentes en las bipartitas con el Ministerio, para trabajar en el nuevo Sistema General de Participación.

El Comité Ejecutivo de Fecode hará un pronunciamiento rechazando tajante frente al boletín emitido por Asoinca. Se harán comunicados dirigidos a los maestros del Cauca, aclarando los logros de magisterio y rechazando la violación de los estatutos de la Federación, por parte de Asoinca.

Se emitirá una circular frente al apoyo que el magisterio nacional tiene ante el plebiscito por la paz; y se acordará una reunión con el ministro del posconflicto.

Fecode y el Ministerio de Educación estudiarán la aplicación del decreto 1335 etnoeducadores, en lo relacionado con los salarios.

Elaborar y diseñar un documento para el magisterio nacional, que sustente el acta firmada el jueves 7 de julio entre Fecode y el Ministerio de Educación.

Se discutirá y analizará el proyecto de un nuevo estatuto docente y se convocará un Encuentro Nacional de Dirigentes del 1278.

Al cierre de la jornada se resalta la importancia de que el magisterio nacional se mantenga en estado de alerta, en dado caso que el gobierno nacional incumpla los acuerdos firmados en la Casa de Nariño.

Junta Nacional de la CUT finalizó con compromiso por la paz

La CUT finalizó su 57 Junta Nacional con un mensaje de unidad y fortalecimiento. La clase obrera se enfrenta a duras políticas regresivas del gobierno.

La Junta Nacional de la CUT, que se celebró los pasados 6 y 7 de julio, le dio un espaldarazo al acuerdo de paz que firmó el gobierno nacional con las Farc en La Habana. Así mismo, ratificó su respaldo al paro cívico nacional convocado por el Comando Central Unitario para octubre.

"La Junta Nacional ratificó la disposición política y logística de apoyar el plebiscito para refrendar el acuerdo firmado en la habana con las Farc. Así mismo, corroboró su compromiso con el referendo por el agro con el que se pretende modificar la constitución política a través de un proyecto de ley de iniciativa popular", expuso Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT.

La CUT brinda su apoyo a los acuerdos de La Habana, pero le recuerda al gobierno nacional que se mantiene firme en su lucha contra las medidas arbitrarias que hoy afectan a la economía del país y los sectores menos favorecidos, sin tener presente el daño que este le viene causando al bolsillo de los colombianos. "Estas medidas vienen afectando, sobre todo, a los sectores más vulnerables, por cuanto el modelo neoliberal y todas sus políticas en últimas perjudican principalmente a la clase obrera del país", argumentó Jorge Bucheli, presidente de la CUT regional Putumayo.

Motivos suficientes para que la CUT mantenga su oposición a las constantes medidas políticas, económicas y sociales que cada día acrecentan la pobreza, el desempleo, la informalidad, el desplazamiento, la inseguridad y la desigualdad social, entre otros problemas que debilitan al país. "Asuntos que tratan sobre la grave situación de diversos sectores de la producción, del trabajo y de la movilización, entre otros, que el gobierno no ha querido atender eficientemente", de acuerdo con Diógenes Orjuela, director de Relaciones Internacionales de la CUT.

La inflación sigue su curso ascendente, la canasta familiar mantiene elevados sus costos, las tarifas en los servicios públicos disparados, el patrimonio público puesto a la venta de los monopolios privados han motivado a que el comando central unitario estudia la posibilidad de un paro cívico nacional. "la Central Unitaria a través de su junta nacional determinó apoyar el paro cívico nacional al que convoque el Comando Nacional Unitario en los próximos meses", puntualizó el presidente de la CUT.

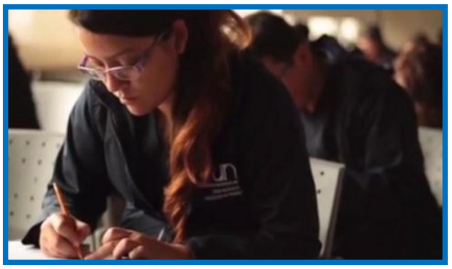
Los tratados de libre comercio, la desprotección total de la industria nacional y el agro colombiano, la brutal arremetida contra la salud pública y la entrega de colegios en concesión son el detonante para que los colombianos afirme su voz de protesta en las calles.

El papel de la Universidad Nacional en los acuerdos

La ayuda humanitaria para el posconflicto debe ser invertida de forma adecuada y equilibrada, de manera que se garantice que realmente se utilice para su propósito: el progreso del país.

Durante el proceso de diálogos de paz entre el gobierno y las Farc, la Universidad Nacional fue centro de seguimiento, socialización y reconstrucción de memoria. Por ello, luego de la firma del cese bilateral de hostilidades, esta se ofrece a ser intermediadora en la construcción de paz.

La Universidad Nacional, entre sus funciones, cumple la misión de ser asesorar al Estado y de ser interventora de la paz. En la etapa del postconflicto estaría encargada de validar los acuerdos y propender porque estos se cumplan. Una labor que permitirá intercambiar saberes, conocimientos y procesos que desde lo público se vienen gestando a nivel local y regional, escuchando y haciendo memoria de todas las voces sin excepción.



Fabio López De La Roche, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la UNAl, explicó: "indudablemente se debe articular con las instituciones y los formuladores de política pública, porque si se tienen estos saberes expertos guardados desde las universidades. Serán estas las que jueguen un papel importante en el proceso de paz y construcción del postacuerdo, luego de la firma con las Farc y ojalá con el ELN, proceso que también deberá involucrar una

creatividad ciudadana".

Desde que inició el proceso de paz hace dos años, la Universidad Nacional se convirtió en centro de producción y pensamiento de la paz. Expertos, académicos y líderes sociales han intervenido al país y de manera participativa han hecho pedagogía y condensado opiniones, propuestas y saberes ciudadanos para visibilizar el accionar de la sociedad civil. Será en el post acuerdo cuando la educación, la escuela y los maestros sean protagonistas del cambio.

"La figura del maestro deberá tener una posición central, tanto en las ciudades como en las regiones; porque es allí donde los maestros juegan un liderazgo, muchas veces de tipo social, muy amplio, son líderes en sus comunidades. Los docentes de colegios y sus grupos consolidados y con más desarrollo intelectual tendrán un protagonismo y un liderazgo social en esta etapa", resaltó De la Roche.

Voluntad, conocimiento y participación, son las labores de la universidad nacional en representación de la educación pública. Pero para garantizar su ejecución el gobierno deberá fortalecer la financiación de los procesos y destinar recursos prioritarios para que el saber haga su trabajo en el post acuerdo.

Referendo por el Agro y por la vida

Las Juntas Nacionales de Fecode y de la CUT manifestaron su apoyo a vincularse por esta iniciativa que busca blindar la sostenibilidad del campo colombiano.

En menos de cinco meses, los promotores del referendo por el agro esperan recoger más de 4 millones de firmas para legitimar una reforma agraria que de soluciones a la precariedad que vive el campo en el país.

"Uno de cada 100 niños hijos de campesinos llega a la universidad. Dos veces y media son más pobres los habitantes del campo que los habitantes de las ciudades. Solamente el 15% de los productores del campo tienen acceso al crédito. El 85% de la población que habita en las zonas rurales no tiene acceso a agua potable".

Un panorama desalentador fue el que dejo el Censo Nacional del Agro, material que alimentó las razones para presentar el pasado 12 de mayo el referendo por el agro, que busca cambiar los artículos 64, 65, 66 y 100 de la Constitución Nacional para que explícitamente el Estado garantice la protección agraria, asegure a los campesinos el acceso al agua, se renegocien los TLC, entre otros.

"Nosotros hicimos una lucha social agraria muy grande durante 2012, 2013, 2014 y 2015, donde firmamos unos acuerdos con el gobierno nacional. Una parte importante de estos acuerdos no se cumplieron, pero durante todo ese proceso hubo una adquisición de conciencia por parte de miles de agricultores de que aquí se está frente a unos problemas de naturaleza estructural", explicó Oscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria.

El referendo por el agro busca obligar al gobierno a presentar en el congreso un proyecto en beneficio de la agricultura familiar que ampare su derecho a conservar y controlar la biodiversidad y el conocimiento en sus territorios. Esta iniciativa popular que busca dignificar el campo y a los campesinos aprendió la lección del referendo del agua. "Van hacer seis meses de recolección de firmas; luego vendrá el procesos de revisión de éstas en la procuraduría; y una vez estas se aprueben iremos al Congreso, acompañados de cien mil productores agropecuarios, campesinos, estudiantes y demás sectores sociales que nos quieran acompañar, a presentar la iniciativa", complementó Gutiérrez.

Que los campesinos vuelvan al campo, que el campo sea un frente productivo, no solo para los grandes empresarios sino para los pequeños productores, que se garantice la seguridad alimentaria y porque se prioricen y protejan los derechos del agro antes que las importaciones, son algunos de los objetivos. Los colombianos tienen la palabra y la vocería para proteger a quienes les han garantizado en alimento en la mesa. La invitación de la CUT y Fecode es a firmar ese referendo.

El asbesto, material que enfrenta salud y economía

El uso de este material ha sido prohibido en buena parte del mundo. Por ello, es urgente conciliar ambas posturas y establecer el modo de beneficiar la salud colectiva, al tiempo que la industria se adapta y busca soluciones.

Pese a que el uso de asbesto es cancerígeno para quienes están expuestos a este material, según la Organización Mundial de la Salud, su explotación y comercialización en el país se mantiene firme en el congreso de la república.

El asbesto se interpuso entre la salud y la economía de los colombianos. Pese a que la Comisión Séptima del Senado hundió el proyecto de ley que buscaba erradicar el uso, la producción y comercialización de asbesto en Colombia, el debate continúa por los riesgos que esta sustancia representa para la salud.

La senadora Nidia Blel planteó: "El asbesto es una fibra reconocida mundialmente por la organización internacional del trabajo y la organización mundial de la salud como cancerígena. Este material produce cáncer de pulmón, cáncer de laringe, mesiotelioma e incluso cáncer de ovario. Por eso radicamos una iniciativa en el Congreso de la República, que buscaba prohibir el uso de cualquier variedad de asbesto en el territorio colombiano".

Por ahora, priman intereses económicos de las empresas que trabajan con este material. La Organización Mundial de la Salud ha alertado en varias ocasiones sobre el peligro que representa el asbesto para las personas. Según los cálculos más recientes, la exposición laboral causa más de 107.000 muertes anuales por cáncer, conocido como mesotelioma y asbestosis.

El gobierno también puso su parte. "No ha habido una responsabilidad empresarial y del gobierno en cómo superar esa dificultad, que hoy en día es un problema de salud pública y de salud en el trabajo debido a la desprotección que existe frente a este tema", expuso Luis Alberto Vanegas, director de Empresas Transnacionales de la CUT.

En Colombia son más de 70.000 personas que trabajan directamente con este material. "Por eso en el proyecto de ley se contempló un plan de adaptación laboral con la ayuda del gobierno a través de Colciencias, el Sena y el Ministerio del Trabajo para darle una alternativa a estos trabajadores, sobre todo en los municipios donde se explota hoy en día el asbesto", dice la senadora Blel. Pero ni aun así se logró aprobar.

"Para algunos senadores no fue suficiente el llamado internacional de la OIT y de la OMS, la prohibición en 57 países, con más músculo financiero y con mejor estructura en salud, ni tampoco las cifras del Instituto Nacional de Cancerología y de la cantidad de víctimas y enfermos que produce la exposición de asbesto en Colombia", añadió.

ENCUENTRO: **DIRECTOR,** Jairo Arenas Acevedo· **PERIODISTAS,** Omaira Morales Arboleda y Fabio Urrego· **PRODUCTORA,** Jadith Amórtegui Acosta· **CAMARÓGRAFO,** Mauricio Ángel González· **EDITOR,** Gisella Zárate· **DISEÑO Y CORRECCIÓN DE ESTILO,** Ernesto Enrique Ballesteros·

fecode
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN